

Argentina: Proyecto Económico en la Encrucijada

Por MARIO BARDI

El plan implementado por la Junta Militar a partir de 1976 avanzó en la consolidación del predominio económico, dentro de un nuevo bloqueo de poder, hegemonizado por el gran capital de origen oligárquico. Grupos económicos de ese origen ocuparon importantes posiciones en las nuevas actividades de punta (petroquímica, petróleo, siderurgia), e inclusive en ciertas ramas tradicionales (como textiles y alimentos), así como también fueron destruidos importantes sectores del empresariado nacional, entre ellos grupos como Greco, Odone, etcétera; que habían crecido a la sombra de los mecanismos financieros destinados a transferir excedentes hacia bloques, en el poder.

Sin embargo, la aplicación sistemática de la política de "destrucción" y la consecuente crisis económica terminaron por afectar a sectores económicos que de por sí son inspiradores y beneficiarios estratégicos del proceso iniciado en 1976.

No se consiguió, por otra parte, liquidar al empresariado nacional hasta el punto requerido por lo menos como fuerza social y política, así como tampoco se logró paralizar la acción de los trabajadores y del movimiento sindical.

En consecuencia, la tarea de construir una "nueva sociedad" está a mitad de camino (más allá de que, a nuestro juicio, dicho objetivo es una utopía reaccionaria). En estas condiciones, las contradicciones que trabalan el logro de los objetivos que se figuran por parte de la dictadura se

multiplican, originadas, en primer lugar, en el hecho de haberse iniciado la "apertura" política en el momento de una crisis de gran profundidad que provoca desconfianza generalizada, y también como resultado de los fracasos de las políticas intentadas y los consiguientes nuevos resquebrajamiento del bloque de poder. Ello permite concluir que en este momento el proyecto está en retroceso, aunque no derrotado. Su caída, de todos modos, ni está garantizada de antemano si será mecánica.

¿HACIA UN CAMBIO DE TIMÓN?

La crisis política profundizada por la tan discutida enfermedad del Presidente Viola dio lugar a todo tipo de conjeturas, sin embargo hay ciertos hechos como el nombramiento del general Nicolaidis en la jefatura del Primer Cuerno del Ejército —el destacamento militar más importante del país— y el acrecentamiento de la represión a los partidos políticos que hacen cada vez más creíbles las versiones de un "golpe" en frío que llevaría al general Galtieri a ocupar la Presidencia de la República y al doctor Alemán u otro de similar orientación como ministro de Economía. Este hecho implicaría el fin de la política de "apertura" y la profundización del proyecto de poder oligárquico, el cual parecía estar suficientemente afianzado cuando finalizaba la función de Martínez de Hoz como ministro de Economía.

SIGUE EN LA PAGINA SEIS

Panorama Latinoamericano

Sigue de la página cinco

En tales condiciones las expectativas, en términos de la situación económica para los meses futuros, no son de ninguna manera promisorias, si, como es de esperar, no ocurre un abandono del proyecto de largo plazo. La Junta Militar se enfrentará crecientemente con la sociedad civil. Hechos como la declaración de la Multipartidaria sobre los desaparecidos, la marcha obrera el día de San Cayetano y la fulminante declaración contra la Junta del radicalismo cordobés se multiplicarán en meses futuros. Paralelamente, se acentúa el interro-

gante acerca de las posibilidades de que, en este marco general, puede esperarse una reactivación del aparato económico, y lo que es más importante todavía, la generación de una corriente de inversiones productivas. Esta falacia no será cubierta por la inversión estatal, ya que la contención del gasto es un objetivo explícito de la política para el sector público.

Tampoco se espera una recuperación inmediata por el lado del sector externo: se calcula para este año un déficit de la cuenta corriente superior de los 3 mil millones de dólares.

La caída experimentada por el salario real y los aumentos en el nivel de desempleo, no permiten ninguna expectativa cierta de que el consumo cumpla un papel dinamizador del mercado interno. En consecuencia, la reducida demanda agregada se traducirá en el estancamiento de los niveles de producción. No podrá revertirse, por lo tanto, la tendencia iniciada en la última parte de 1979 y que se prolonga en lo que va de 1981, configurando uno de los periodos recesivos más largos en la historia económica argentina.

Por su parte, importantes grupos empresarios, sindicatos y partidos políticos, profundizarán su alianza para oponerse, desde una plataforma más amplia, a las medidas que comprometen su existencia. Este enfrentamiento adquiere características cada vez más explícitas y violentas desde que asumió el nuevo equipo gobernante.

Se mantiene vigente, en consecuencia, el principio por el cual para impulsar formas de propiedad que tiendan a satisfacer las necesidades de las mayorías y a combatir aquellas que centralizan el poder económico en torno de un reducido sector de clase dominante, debe tenerse clara la necesidad de construir un aparato productivo acorde con formas de propiedad más descentralizadas y una distribución del ingreso más uniforme.

Sin embargo, como la experiencia histórica lejana y reciente nos lo demuestra, no es posible sustentar esas políticas en el largo plazo a menos que se ataque la actual estructura de propiedad en su columna vertebral. Esto quiere decir que debe ser nacionalizada la propiedad oligárquica, sector social que constituye el escollo fundamental para el desarrollo de un proyecto que pretenda, por medio de

la acción del Estado una sociedad más equitativa, aun cuando no se plantee alterar de raíz las relaciones capitalistas. Esto es así debido a que el carácter eficiente o ineficiente de una determinada asignación de recursos jamás puede ser medido —como se hace en el discurso ideológico actual— en términos de principios abstractos y universalmente válidos

sobre la gestión empresarial, combinados con criterios sobre ventajas comparativas tan indefinidas como las anteriores.

La eficiencia debe ser medida en términos del bienestar de la sociedad y éste es mayor cuanto más equitativa es la distribución del ingreso, elemento que, como es obvio, el proyecto actual no puede garantizar.